

PONENCIA-

**DESAFIOS ACTUALES EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN EN SEGUROS: UN COMENTARIO AL FALLO “TOSCANO, JORGE LUIS C/ CAJA DE SEGUROS” (30/07/2024) DE LA SCBA**

Autor: Guastalegname, Leonardo<sup>(1)</sup>

leonardoguastalegname@gmail.com

*“Implicancias jurídicas y consecuencias de un polémico fallo de la SCBA sobre el plazo de prescripción en seguros”*

Sumario: I. Introducción – II. El Caso – III. El plazo de Prescripción en los Consumidores de Seguros: Implicancias legales, normativa y jurisprudencia aplicable – IV. Conclusión – V. Propuesta.

Abstract:

El plazo de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, originariamente, no presentaba dudas en su aplicación, ni tampoco interpretaciones heterogéneas. En conformidad con lo dispuesto por el art. 58 de la Ley de Seguros, el término aplicable siempre fue de UN (1) año.

La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en el año 2015 comienza a suscitar nuevos interrogantes en parte de la doctrina y la jurisprudencia tras la modificación del art. 50 de la Ley 26.361. A partir de ello, queda eliminado el plazo de prescripción de TRES (3) años que estaba previsto expresamente para las acciones judiciales y queda restringido únicamente a las sanciones administrativas que emergen de dicha ley.

Por consiguiente, se genera un nuevo paradigma en relación al plazo de prescripción aplicable al contrato de seguro, el cual a nuestro entender y en virtud principalmente de los artículos 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como de los fundamentos y artículos 1094, 2560 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debe aplicarse el plazo

---

<sup>(1)</sup> Abogado y Docente de las materias “Contratos Civiles y Comerciales” (UBA) por concurso público, Resolución (CD) N° 1398/24, y “Tutela del Asegurado y Contrato de Seguro” (UBA).

genérico de CINCO (5) años, dado que tiene preeminencia interpretativa sobre la regulación especial de la Ley de Seguros.

Sin perjuicio, gran parte de destacados doctrinarios mantienen su postura y sostienen firmemente que el plazo de prescripción en materia de seguros continúa siendo de UN (1) año. Ello, fue adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para resolver el fallo “Toscano, Jorge Luis c/ Caja de Seguros S.A. s/ Daños y Perjuicios por incumplimiento contractual”.

No obstante, si bien compartimos con el alto tribunal de la Provincia de Buenos Aires la existencia de una relación de consumo habida entre las partes, respetuosamente discrepamos en ciertos aspectos que ha postulado para pronunciarse, debido a que entendemos que no realizó un análisis sistemático de las normas aplicables ni una interpretación adecuada de varios precedentes y principios legales pertinentes. En este contexto, sostenemos que debería haber revocado la sentencia pronunciada por la Cámara de Apelaciones y admitido el plazo de CINCO (5) años requerido por la actora, conforme lo establece el art. 2560 del Código Civil y Comercial.

## I. | Introducción:

A lo largo de la siguiente presentación procuro abordar un tema de suma importancia en el ámbito del derecho de seguros, la resolución de un fallo reciente que ha sido desencadenado por el alto tribunal de la Provincia de Buenos Aires y ha suscitado interrogantes acerca de la correcta aplicación del plazo de prescripción.

En ese contexto, vamos a abordar el asunto dentro de un marco normativo consumeril tendiente a armonizar el plexo jurídico que lo integra<sup>(2)</sup>, sin soslayar la base constitucional y los tratados de derechos humanos en su carácter como tal.

Asimismo, no solo propongo analizar la normativa aplicable, sino también revelar algunos de los precedentes asentados por distintos tribunales del país que han contribuido a favorecer una interpretación más amplia del plazo de prescripción en las acciones derivadas del contrato de seguro. A través de este análisis, buscaré fomentar el debate y la reflexión e intentaré demostrar que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia la Provincia de Buenos Aires puede tener implicancias significativas en la protección de los derechos del consumidor de seguros y en el acceso a la justicia.

Por último, no quiero pasar por alto que este trabajo tiene como objetivo contribuir a un análisis enriquecedor sobre la necesidad de explorar las implicancias de la resolución del alto

---

<sup>(2)</sup> Art. 3, Ley 24.240, modificada por Ley 26.361 y Ley 26.994, “Ley de Defensa del Consumidor”.

tribunal de la Provincia de Buenos Aires. A través del desarrollo de la normativa y los precedentes aplicables, espero ofrecer una perspectiva crítica que enriquezca la discusión en torno al fallo.

## II. | El caso<sup>(3)</sup>

El 30 de junio de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata en los autos caratulados “Toscano, Jorge Luis c/ Caja Seguros S.A. s/ daños y perjuicios por incumplimiento contractual”, y rechazó el recurso extraordinario por inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor. A partir de ello, resolvió que el plazo de prescripción en seguros es de UN (1) año y reconoció la existencia de una relación de consumo entre las partes ligadas al contrato.

El conflicto ocurre luego de que la aseguradora rechazara el reclamo administrativo interpuesto por el actor, un agente de la policía de la Provincia de Buenos Aires, quien, tras su retiro activo, alegó sufrir una incapacidad física, total, permanente e irreversible. Por tal motivo, solicitaba el pago de la suma asegurada en virtud de la póliza de seguro de vida e incapacidad física contratada por su empleador y en su beneficio.

Los argumentos esgrimidos por el tribunal de alzada para desestimar la acción interpuesta por el actor y hacer lugar a la prescripción de UN (1) año opuesta por la demandada fueron convalidados por la Suprema Corte, basándose en lo dispuesto por la Ley de Seguros. En ese sentido, entendió que, con la sanción del Código Civil y Comercial desapareció el conflicto normativo que existía respecto a la prescripción de las acciones judiciales en seguros y, tras ello, dejó de ser indispensable acudir a la interpretación más favorable a los intereses del consumidor, como sucedía durante la vigencia del art. 50 de la Ley 26.361.

Asimismo, citando el precedente judicial “Buffoni” de la CSJN, argumentó que una ley general posterior no puede derogar ni modificar, implícita o tácitamente, una ley especial anterior. Por consiguiente, tras la reforma del art. 50 de la Ley 26.361, a través del art. 2532 CCCN, el art. 58 de la Ley de Seguros pasa a tener preeminencia sobre la aplicación del plazo genérico previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial.

Finalmente, destacó que es aplicable al caso el bloque normativo del derecho de consumo; no obstante, desestimó que lo normado por el Código Civil y Comercial en materia de prescripción constituya un piso mínimo de protección para el consumidor, y señaló que la

---

<sup>(3)</sup> SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, “**Toscano, Jorge Luis s/ Caja de Seguros S.A s/ daños y perjuicios por incumplimiento contractual**”, 30/07/2024.

aplicación de UN (1) año al plazo de prescripción, aunque sea menor, no compromete los derechos humanos ni implica una regresión de los derechos.

### III. | El plazo de Prescripción en los Consumidores de Seguros: Implicancias legales, normativa y jurisprudencia aplicable

Desde nuestra perspectiva, expresamos con el mayor respeto nuestra disidencia con la resolución del alto tribunal de la Provincia de Buenos Aires. A nuestro entender, no se llevó a cabo una valoración sistemática adecuada que esté en consonancia con el ordenamiento jurídico consumeril, ni con la línea jurisprudencial que se ha ido consolidando durante los últimos tiempos, tanto en la Provincia de Buenos Aires<sup>(4)</sup> como en otras jurisdicciones del país<sup>(5)</sup>, donde se ha aplicado el plazo genérico quinquenal dispuesto por el Código Civil y Comercial.

Primeramente, es dable recordar que los derechos del consumidor no solo poseen jerarquía constitucional<sup>(6)</sup>, sino también convencional. Gran parte de la doctrina, incluso el tribunal en el fallo “Toscano”, ha considerado que forman parte de los derechos humanos por ser considerados

---

<sup>(4)</sup> **Fallos de referencia:** CÁMARA SEGUNDA CIVIL Y COMERCIAL DE LA PLATA, Sala 2, “**Prado, Roberto Daniel c/Caja de Seguros S.A. s/Daños y Perjuicios**”, 07/09/2021; CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MERCEDES, Sala I, “**Vega, Adriana Luz Mayra y Otro/a c/ Antártida Compañía Argentina de Seguros s/Daños y Perj.**”, 05/12/2019; CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MERCEDES, Sala III, “**Storino Marcela Mariana c/ Provincia Seguros S.A. s/ Daños y Perj.**”, 04/03/2020; CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MERCEDES, Sala I, “**Torres, Rocío Soledad y Otros c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. s/ Daños y Perj.**”, 17/12/2021; CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MERCEDES, Sala I, “**Miranda, María Alejandra c/ Triunfo Cooperativa de Seguros s/ cumpl. de contratos civ. y com.**”, 09/06/2022; CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE AZUL, Sala I, “**Lobos, Silvio Rodrigo c/ Providencia Seguros S.A. s/ Daños y Perj.**”, 05/10/2023; CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE AZUL, Sala II, “**Colombo, Carlos Alberto c/ Caja de Seguros S.A. y Otro s/ Daños y Perj.**”, 04/04/2024.

<sup>(5)</sup> **Fallos de referencia:** CSJ MENDOZA, Sala Primera, “**Olivera, Ariadna Nerina c/ Triunfo Seguros s/recurso extraordinario federal**”, 22/04/2020; CNCOM., Sala F, “**Sittner, Nelida Elida c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Ordinario**”, 05/03/2020; CNCOM., Sala C, “**Linzitto, Silvia Mabel c/ Sancor Cooperativa de Seguros LTDA. s/Ordinario**”, 02/06/2020; CNCOM., Sala B, “**Medina, Gonzalo Ramón Oscar c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada**”, 26/04/2023; CNCOM., Sala B, “**Juani, Silvia Alejandra c/ Caja de Seguros S.A.**”, 12/05/2023; CNCOM., Sala C, “**Diaz Carisimo, Benigno David c/ Zurich Aseguradora Argentina S.A. s/Ordinario**”, 24/08/2023;

<sup>(6)</sup> Art. 42, Ley 24.430, “Constitución de la Nación Argentina”.

derechos fundamentales<sup>(7)</sup>. Por tal motivo, no debemos soslayar la importancia del bloque normativo de supralegalidad conformado por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

En este sentido, nos parece pertinente aludir a las palabras del distinguido doctrinario Waldo Sobrino, quien postula que, además de nuestra Carta Magna, los tratados internacionales consagrados en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional son aplicables tanto a los consumidores en general como a los consumidores de seguros en particular. Por ello, es fundamental considerar los principios que respaldan la aplicación efectiva de estos tratados, que son “pro homine”, “operatividad”, “progresividad y “no regresión”<sup>(8)</sup>.

En relación con el principio “pro homine”, consiste en una regla que, ante la pluralidad de normas aplicables a una misma situación jurídica, exige al intérprete optar por aquella que ofrezca una protección más favorable para la persona humana. Esto significa que debe prevalecer la norma que favorezca los derechos de los consumidores, desestimando las limitaciones que otras disposiciones pudieran imponer a esos derechos<sup>(9)</sup>.

---

(7) TAMBUSSI, CARLOS E., “Consumidores, derechos humanos, convencionalidad y no regresividad. Aportes para la argumentación” Revista de Derecho de Daños, 2016(1), p. 417. <https://biblioteca.justiciacordoba.gob.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8ce89eadf437b1d2cf8ddb71eff3711e>, consultado el 14/10/2024.

(8) SOBRINO, WALDO, “Prescripción de 5 años en seguros”, *¿Se aplica la Constitución Nacional, los tratados internacionales y el Código Civil y Comercial?*, Tomo La Ley 2023-C, Año LXXXVII N° 105, Buenos Aires, Argentina, 07/06/2022, p. 2.

(9) SHINA, FERNANDO, “Los Derechos Humanos y los derechos del consumidor. Entre el realismo mágico y el populismo jurídico”, en línea en <http://www.saij.gob.ar/fernando-shina-derechos-humanos-derechos-consumidor-entre-realismo-magico-populismo-juridico-dacfl80227-2018-10-23/123456789-0abc-defg7220-81fcanirtcod?&o=16&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20comercial%7COrganismo%5B50%2C1%5D%7CAutor/FERNANDO%20E.%20SHINA%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%Etica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=19>, consultado el 14/10/2024.

Respecto a la “operatividad” implica que todos los derechos humanos al ser operativos no requieren una ley que los reglamente. Esto contribuye a asegurar la plena vigencia de los valores democráticos y a realzar el ideal de justicia<sup>(10)</sup>.

Por otro lado, los principios de “progresividad” y “no regresión” como reglas complementarias, establecen que, una vez decretado un derecho humano pasa a ser inherente a la persona y no puede posteriormente dejar de serlo. Sin embargo, algunos autores admiten la posibilidad de algunas excepciones, lo que implica que no son reglas absolutas<sup>(11)</sup>. Además, la progresividad conlleva el deber del Estado de adoptar medidas adecuadas para lograr de manera progresiva la plena efectividad de los derechos de los consumidores, sin retroceder en los avances de protección alcanzados<sup>(12)</sup>.

Teniendo en cuenta dichos los principios, entendemos que los argumentos que llevaron al alto tribunal provincial a resolver el caso no se ajustan a una valoración adecuada de los mismos.

Asimismo, Sobrino postula que, tras la modificación de nuestra Carta Magna en 1994 y la inclusión de los derechos del consumidor como derechos que deben ser protegidos, se hace necesario que ajustemos las normas a esta nueva manda constitucional. Por ello, llega a la conclusión que la normativa de consumo, además de ser aplicable al ámbito de seguros, puede modificar cualquier norma establecida en la Ley de Seguros que tienda a desproteger la situación de los consumidores<sup>(13)</sup>.

Sin perjuicio de ello, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y su integración a lo que Chamatrópulos denomina “Estatuto del Consumidor”<sup>(14)</sup>, lo apropiado sería

---

<sup>(10)</sup> HINÉS, LUISA, “La operatividad de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos”, en línea en [http://www.saij.gob.ar/doctrina/daca870173-hines-operatividad\\_derechos\\_reconocidos\\_en.htm](http://www.saij.gob.ar/doctrina/daca870173-hines-operatividad_derechos_reconocidos_en.htm), consultado el 14/10/2024.

<sup>(11)</sup> SHINA, FERNANDO, *ibid*.

<sup>(12)</sup> SAHIAN, JOSÉ, “Los principios del derecho de los consumidores. Consideraciones generales y breve aproximación a la problemática de los usuarios en entornos digitales”, en línea <https://biblioteca.justiciacordoba.gob.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=cf156321add8854279e46f2b24441f33>, consultado el 14/10/2024.

<sup>(13)</sup> SOBRINO, WALDO, “Consumidores de seguros: la aplicabilidad de la normativa consumerista en el derecho de seguros”, en línea [http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacc100077-sobrino-consumidores\\_seguros\\_aplicabilidad\\_normativa.htm](http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacc100077-sobrino-consumidores_seguros_aplicabilidad_normativa.htm), consultado el 14/10/2024.

<sup>(14)</sup> CHAMATRÓPULOS, DEMETRIO A., “Estatuto del Consumidor Comentado”, 2º ed., Buenos Aires, La Ley, 2016, pp. 270/271

resolver el conflicto del caso mediante una interpretación acorde al diálogo de fuentes, considerando en principio los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial.

A partir de ello, es necesario que hagamos un análisis interpretativo sistemático de las fuentes en materia de consumo, lo que nos conduce desde nuestra perspectiva a valorar el art. 1094 y los fundamentos del Código Civil y Comercial, que determinan que las normas allí comprendidas constituyen el “piso mínimo” y “núcleo duro” de protección de los consumidores<sup>(15)</sup>. Este postulado nos lleva a enfatizar la necesidad de una protección mínima para el consumidor, independientemente de si la ley aplicable es general o especial.

En ese sentido, los fundamentos del Código también destacan la importancia de que el intérprete de una ley especial recurra a la norma general para abordar lo no regulado en la legislación especial y para determinar el piso mínimo de protección conforme con el principio de interpretación más favorable al consumidor<sup>(16)</sup>.

Por lo tanto, si estamos ante una ley especial que no regula un asunto específico o que, si lo hace, resulta perjudicial para el consumidor, entendemos que el intérprete debe recurrir a una ley general que garantice una mayor protección de sus derechos.

Ahora bien, si nos remitimos al fallo “Toscano”, podemos observar que no se alinea tampoco con lo antedicho. Que la Suprema Corte provincial haya convalidado la aplicación del plazo anual por el mero hecho de estar previsto en la Ley de Seguros no lo consideramos razonable, ni representa desde nuestro punto de vista un análisis interpretativo sistemático de las fuentes en materia de consumo.

Por otro lado, en relación al fallo “Buffoni”, citado como argumento para validar el plazo anual de prescripción, la doctrina ha señalado que, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el año 2014 no estaba vigente el Código de Vélez Sarsfield. Por lo tanto, los argumentos fueron esgrimidos con la normativa de ese momento y no con el Código Civil y Comercial. También, cabe destacar que el Tribunal Címero partió de un concepto erróneo al afirmar que estaban en pugna una Ley General y una Ley Especial, al considerar en ese entonces que la Ley de Defensa del Consumidor era una ley general, de acuerdo a lo que expuso en el considerando 12: *“Que no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no*

---

<sup>(15)</sup> SOBRINO, WALDO, “Seguros y el Código Civil y Comercial”, T.1., Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, 2016, p.744.

<sup>(16)</sup> CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, “Código Civil y Comercial de la Nación (ed. revisada, ordenada y concordada por varios autores)”, 1º ed., Buenos Aires, Astrea, 2015, p. 317.

*deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro (M.1319.XLIV "Martínez de Costa, María Esther cl Vallejos, Hugo Manuel y otros si daños y perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009)"*<sup>(17)</sup><sup>(18)</sup>. Este mismo postulado fue luego replicado en el considerando 6 del fallo "Sittner", donde el tribunal de alzada destacó que la decisión en "Buffoni" se tomó en un contexto distinto<sup>(19)</sup>.

También cabe destacar varios fallos que fueron pronunciados por diferentes tribunales de nuestro país que, han postulado en los últimos años argumentos semejantes a todo lo antes expuesto para respaldar la aplicación del plazo quinquenal de prescripción en las acciones derivadas de seguros.

Uno de ellos es el precedente "Sittner, Nelida Elida c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/Ordinario" de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, cuya resolución fue dictada el 05 de marzo de 2020. El tribunal de alzada, expresó que el plazo previsto por la Ley de Seguros es absolutamente breve y condenatorio de los derechos de los asegurados, ya que contraviene los principios protectores de los consumidores dispuesto por el art. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Además, sostuvo que los derechos de los consumidores, al formar parte de los derechos humanos, no deben eludir el control de convencionalidad; y señaló que, de aplicarse un plazo menor se incurriría en una regresión de los derechos protectores ya alcanzados. Por último, cabe destacar que el tribunal de alzada valoró el diálogo de fuentes y su integración normativa, considerando el piso mínimo y núcleo duro de protección al consumidor ordenado por los fundamentos y el art. 1094 del Código Civil y Comercial<sup>(20)</sup>.

Otro, es el fallo "Olivera, Ariadna c. Triunfo Seguros", pronunciado por el máximo tribunal de justicia de la Provincia de Mendoza el 22 de abril de 2022, en el que se rechazó la excepción de prescripción anual opuesta por la aseguradora demandada e hizo lugar al plazo genérico de prescripción previsto por el Código Civil y Comercial. En esta resolución, uno de los argumentos trascendentales esgrimidos por el superior tribunal provincial es que la fuente principal del

---

<sup>(17)</sup> SOBRINO, WALDO, *ob cit*, p.775.

<sup>(18)</sup> CSJN, "Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios", 08/04/2014.

<sup>(19)</sup> "Sittner, Nelida Elida c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Ordinario", *cit*.

<sup>(20)</sup> "Sittner", *ibid*.



derecho de consumo es la Constitución Nacional y ello conlleva a realizar una interpretación más favorable para el consumidor<sup>(21)</sup>.

También, en el fallo “Miranda, María c/ Triunfo Cooperativa de Seguros” la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes respaldó el plazo genérico quinquenal en la resolución dictada el 09 de junio de 2022. La Cámara argumentó que el plazo genérico previsto por el Código Civil y Comercial resulta más razonable y se armoniza con todo el marco normativo de defensa del consumidor, en consonancia con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Además, consideró que el Código Civil y Comercial actúa como una protección mínima y un núcleo duro de tutela del consumidor, el cual no puede ser quebrantado por una ley especial<sup>(22)</sup>.

Luego, en el fallo “Medina, Gonzalo Ramón Oscar c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada” dictado el 26 de abril de 2023 por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se abordó un conflicto donde el recurrente solicitaba la aplicación del plazo genérico de CINCO (5) años. El tribunal de alzada para dejar sin efecto el plazo anual fijado por el a quo, señaló, entre otros argumentos, que no se trata de dilucidar una cuestión de normas en pugna, sino de proximidades al texto constitucional. Además, el tribunal destacó que es responsabilidad del Estado resguardar los derechos fundamentales del consumidor y garantizar la tutela judicial efectiva de estos derechos, con el fin de nivelar las desventajas estructurales en las que se encuentra. Consideró, también, que aplicar el plazo de la Ley de Seguros, al ser menor, incluso que el previsto por el Art. 50 de la Ley 26.361, vulneraría el principio de progresividad o no regresión. Este enfoque llevó al tribunal a revocar la sentencia de primera instancia y a aplicar al plazo genérico de prescripción establecido en el art. 2560 del Código Civil y Comercial<sup>(23)</sup>.

Por último, cabe destacar el fallo “Colombo, Carlos Alberto c/ Caja de Seguros S.A.” que es uno de los últimos en los que se desestimó el plazo anual fijado en la Ley de Seguros y se admitió la aplicación del plazo genérico de CINCO (5) años para las acciones judiciales derivadas del contrato de seguro, en atención al vacío normativo generado por el Código Civil y Comercial al art. 50 de la Ley 26.360. El tribunal de alzada receptó diversos fallos de los que hemos expuestos para formular sus argumentos y resaltó que el plazo quinquenal es el que mejor se adecua a la protección constitucional y legal del consumidor emergente del art. 42 de la Constitución Nacional, art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 1094 del Código Civil

---

<sup>(21)</sup> “**Olivera, Ariadna Nerina c/ Triunfo Seguros s/recurso extraordinario federal**”, *cit.*

<sup>(22)</sup> “**Miranda, María Alejandra c/ Triunfo Cooperativa de Seguros s/ cumpl. de contratos civ. y com.**”, *cit.*

<sup>(23)</sup> “**Medina, Gonzalo Ramón Oscar c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada s/Ordinario**”, *cit.*

y Comercial, y arts. 3 y 37 de la Ley Defensa del Consumidor. Además, hizo una valoración estricta del art. 1094 del Código Civil y Comercial en cuanto ordena que de existir duda entre interpretar una de las leyes de dicho cuerpo normativo o de las leyes especiales, debe prevalecer la ley que sea más favorable al consumidor. Todo ello, llevó al tribunal a enriquecer el análisis de la cuestión<sup>(24)</sup>.

#### **IV. | Conclusión**

Podemos revelar que el pronunciamiento del alto tribunal de la Provincia de Buenos Aires, no se ajusta al control de convencionalidad por apartarse de los principios de progresividad y no regresión de derechos al establecer un plazo de prescripción de menor cuantía que el anteriormente vigente y, además, que transgrede el piso mínimo y núcleo duro de protección al consumidor que ordena el Código Civil y Comercial por disposición de los fundamentos y del art. 1094 de dicho cuerpo normativo.

Asimismo, entendemos que resulta esencial que se realice un análisis sistemático de las normas aplicables, sin soslayar los principios protectorios de los consumidores que derivan del art. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como los precedentes consolidados que han validado el plazo genérico como término trascendental para asegurar que los derechos de los consumidores de seguros estén debidamente protegidos.

Por tal motivo, entendemos que la sentencia pronunciada por la Cámara de Apelaciones debería haberse revocado. Para ello, y por imperio de una interpretación armónica y concordada de los artículos 42, 75 inc. 22 de la CN, el art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los fundamentos y arts. 1, 2, 10, 11, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 2532, 2560 y concordantes del Código Civil y Comercial y arts. 1, 2, 3, 8 bis, 37, 50, 65 y concordantes de la Ley de Defensa del Consumidor, correspondería aplicar el plazo genérico quinquenal previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial.

#### **V. | Propuesta**

Propongo que nos replanteamos el pronunciamiento de la SCBA en el fallo “Toscano” optando por una interpretación sistemática que contemple un análisis integral de toda la normativa de consumo y principios pertinentes. Esto nos permitiría valorar de otro modo la procedencia del

---

<sup>(24)</sup> “Colombo, Carlos Alberto c/ Caja de Seguros S.A. y Otro s/ Daños y Perj.”, *cit.*

plazo de prescripción de 5 años en seguros y establecer criterios más claros para futuro casos, dejando a salvo el plazo de 1 año aplicable solo a las acciones iniciadas por las aseguradoras.